

Un país armado

Abril 09 de 2006

Durante el 2005, 280 personas murieron en Colombia al pisar minas antipersonales, y 780 más quedaron mutiladas, según un informe de la ONU. Otro informe de la Universidad de Ginebra, por su parte, revela que 475.000 colombianos fueron muertos con armas de fuego de distintos calibres y diferentes procedencias entre 1979 y el 2005. En el caso de las minas, 22 de sus víctimas fueron civiles, mientras que 437.000 en el de las armas no tenían vinculación alguna con las fuerzas del orden o los llamados combatientes. Puesto en otros términos, sólo el 2% en un caso y el 8% en el otro, corresponden a los participantes en el conflicto.

Lo de las minas antipersonales, o 'quiebrapatatas', como se conocen en el argot popular, es una muestra del grado de insensatez al que ha llegado el llamado conflicto en Colombia. ¿Cómo puede ser posible que las Farc planten minas en las matas de coca que están siendo arrancadas en la Sierra de La Macarena, y todavía existan quienes afirmen que son decisiones con contenido político? ¿O qué muchos municipios pequeños sean con frecuencia sitiados con explosivos, bajo el argumento de ser armas defensivas para protegerse de ataques de los enemigos, y a sabiendas de que las víctimas serán casi siempre civiles? Por algo tenemos el triste honor de ser el país con más minas en el mundo.

El estudio de 'Small Arms Survey', titulado 'La Hidra de Colombia', presenta datos que deberían producir una reacción de los colombianos. Por ejemplo, saber que el número de las armas legítimas en poder de los civiles es casi igual a las que tiene la Fuerza Pública, alrededor de 950.000, tiene que generar una gran preocupación. Que se incrementa en proporciones geométricas cuando se conoce el dato de las armas ilegales en manos particulares: cerca de 2,4 millones, según estimativos de la Policía Nacional.

Armas con las que los grupos de violencia organizada, las innumerables bandas de criminales comunes o simples delincuentes de la calle amenazan y atacan a una nación de 42 millones de habitantes. Y que obligan a la población civil a comprar armas, o a crear cuerpos de seguridad privada, en proporción tal que hoy sus efectivos equivalen a los cuerpos de Policía.

Eso quiere decir que Colombia es un país armado, que amenaza la vida y la integridad de los ciudadanos y cuyo Estado no parece capaz de imponer el orden que demanda la situación, pese a contar con instrumentos legales para el efecto. Un país que no ha tomado conciencia sobre el peligro que significa el vivir en medio de la espiral armamentista, de la cual se nutre, en primer lugar, la delincuencia común. Y una sociedad que no parece dispuesta a aceptar la necesidad de mantener el monopolio de las armas en manos de las autoridades legítimas, para fijarle en forma clara las responsabilidades que les corresponden y poder exigirle las respuestas que necesita.

Frente a los 475.000 muertos por armas de fuego, resulta por lo menos paradójico la resistencia de algunos sectores, incluidas autoridades, que se niegan a desarmar a la población argumentando el derecho a la defensa. Hace unos años, Cali adoptó esa política, la que después fue aplicada en Bogotá, con resultados indiscutibles para la tranquilidad de las comunidades. ¿Por qué no retomar esas experiencias, y atreverse a desarmar al país, paso fundamental para encontrar la convivencia pacífica que necesita la Nación?

Frente a los 475.000 muertos por armas de fuego, resulta por lo menos paradójico la resistencia de algunos sectores, incluidas autoridades, que se niegan a desarmar a la población argumentando el derecho a la defensa.